

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 131/2016
SOLICITANTE: CONTRALOR DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO: *******

PONENTE: MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I.

SECRETARIO: RAÚL MENDIOLA P.

Colaboró: Ingrid Maleny Meraz Marrufo

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al **diecinueve de agosto de dos mil diecinueve**.

Vo. Bo.

Ministro:

SENTENCIA:

Correspondiente al expediente de responsabilidad administrativa **131/2016** solicitada por el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciada contra *****.

ANTECEDENTES:

Cotejó:

1. El uno de agosto de dos mil dieciséis, ***** como representante de ***** , presentó un escrito en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el cual informó hechos probablemente constitutivos de una infracción administrativa por parte del servidor público ***** , al que anexó como probanzas: un tiket de Sanborns; una factura por consumo de alimentos y una notificación de adjudicación signada por el Director General de Recursos Materiales de este Alto Tribunal.
2. En el escrito de referencia, se narró de manera expresa lo siguiente:

SE SUPRIMEN IMÁGENES

3. El ocho de agosto de dos mil dieciséis el Contralor de la Suprema Corte emitió un acuerdo en el que señaló que los documentos anexados no eran suficientes para tener acreditada la probable responsabilidad, por lo que **desechó la queja** interpuesta (cuaderno *****). No obstante, en términos del Acuerdo General 9/2005 del Tribunal Pleno puso a consideración del Ministro Presidente la autorización para el inicio de una investigación –en un plazo de seis meses– respecto de los hechos relatados en aquel escrito.
4. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis el Ministro Presidente ordenó la realización de la investigación ya que los hechos arrojaban una posible irregularidad que implicaría una infracción administrativa relacionada con actos de corrupción cometidos en los procedimientos de adjudicación de las contrataciones que la empresa ***** ha tenido con esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo la solicitud de dinero o de cualquier otro beneficio en especie que pudo formularse directamente por un servidor público o a través de terceros al representante de aquella persona moral o cualquier otra persona relacionada con ella. Esto a partir de los términos y condiciones establecidos el ocho de agosto anterior.
5. El seis de octubre de dos mil dieciséis, comparecieron ***** y ***** . El primero reiteró lo relatado en el escrito de queja, y la segunda señaló que el veintiuno de julio de dos mil dieciséis los abogados de la empresa fueron a buscar al denunciante en las instalaciones laborales, tal como quedó informado en el escrito primigenio.
6. Una vez cerrada la investigación el **nueve de octubre de dos mil diecisiete** el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Directora General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial formuló dictamen que puso a consideración del Ministro Presidente en el que concluyó que se contaban con las pruebas suficientes para acreditar que ***** posiblemente incurrió en la causa

de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,¹ por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral 8º, fracción XII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.² Esto bajo las razones substanciales siguientes:

[...]

*La afirmación hecha por ***** en su queja a la luz de las pruebas referidas permite concluir el (sic) treinta de junio de dos mil dieciséis, entre las siete y las ocho de la noche, sí acudió con los abogados de la empresa ***** , ***** y ***** y que sí se encontró con ***** en el restaurante Sanborns ubicado en ***** , colonia ***** , delegación ***** , a la que lo habían citado sus abogados para entregar a ***** el dinero en efectivo que se le solicitó, a saber, ***** .*

[...]

*De conformidad con lo expuesto, se estima que las pruebas recabadas durante la investigación arrojan una serie de indicios que debidamente administrados de manera lógica y natural y justipreciados de manera conjunta en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, resultan eficaces para tener por demostrado, hasta este momento, que el treinta de junio de dos mil dieciséis ***** recibió de ***** , la cantidad de ***** con el argumento de que eran para que el expediente de la empresa ***** no tuviera problemas en la Contraloría del Alto Tribunal, siendo que esa cantidad, al parecer, la recibió por medio de terceros, a saber, de ***** y ***** , además, en esa misma fecha ***** pidió a ***** la cantidad de ***** ,*

¹ Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

[...]

XI. Las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional. [...].

² ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

[...]

XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión. [...].

como dádiva por las contrataciones que le había adjudicado el Alto Tribunal a la empresa *****, de la cual ***** es su representante, aduciendo ***** que ya le había hecho ganar mucho dinero.

Es posible afirmar lo anterior, porque las pruebas analizadas precisamente arrojan los indicios que a continuación se precisan.

[...]

Lo anterior permite aseverar que no fue casual que ***** y ***** estuvieron presentes en el mismo lugar, en la misma fecha y a la misma hora, en un establecimiento cercano al domicilio de ***** sino que ello fue con motivo de la citación a la reunión que sus abogados ***** y ***** le hicieron saber a aquel destacando que no es casual que esa reunión estuviere ***** quien los atendió en el trámite de la prórroga de contratación.

[...]

Cobra especial relevancia el reconocimiento de ***** de que se presentó en el restaurante Sanborns, en la fecha y horario ya indicados, que hizo aun a sabiendas de los hechos que le imputa ***** en su escrito de queja y en su declaración de seis de octubre de dos mil dieciséis, pues previamente al mismo, el veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, de esos documentos se le entregó copia.

[...]

IV. Infracción administrativa y probable responsabilidad.

El análisis de las pruebas recabadas durante la investigación, como se señaló permite concluir que, posiblemente, ***** incumplió con la obligación contenida en el artículo 8, fracción XIII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por lo anterior, se considera que el actuar de ***** podría ubicarse en la causa de responsabilidad prevista en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al incumplir la obligación

establecida en el artículo 8, fracción XIII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

[...].

7. El **cuatro de diciembre de dos mil diecisiete** el Ministro Presidente ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad. El **trece siguiente** se especificó ser iniciado por falta grave; se fijó la fecha de audiencia; y, se determinó la suspensión temporal de ********* en el cargo que desempeñaba.
8. El **dos de febrero de dos mil dieciocho** se llevó a cabo la audiencia de defensa a la cual compareció el servidor público imputado asistido por su abogado autorizado. El compareciente manifestó, entre otras cosas, *negar todos y cada uno de los hechos que se le imputaban* además afirmó que *la queja que sirve como base de la acción se sustenta en un testigo de oídas y no en una persona que denuncia actos propios que le consten; que jamás marcó el veintiuno de junio de dos mil dieciséis a la oficina de ******; asimismo, ofreció diversos medios de convicción.
9. Mediante acuerdo de **dieciocho de abril de dos mil dieciocho** el Contralor de este Alto Tribunal determinó el **cierre de instrucción** al no existir diligencias pendientes y al estar debidamente integrado el expediente el siete de mayo siguiente se turnó a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán.
10. En sesión privada de **veinticinco de marzo de dos mil diecinueve** se sometió a votación la propuesta del proyecto la cual fue desechada, por lo que el asunto se asignó al Ministro que por turno correspondiera. El **veintiséis siguiente** se ordenó el envío de los autos a la ponencia del Ministro Eduardo Medina Mora I.

CONSIDERACIONES

11. **PRIMERO. Competencia.** Este Tribunal Pleno es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 94, párrafos segundo y quinto, 109, fracción III, y 113 constitucionales; 10, fracción XII, 11, fracción XXI, y 133, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3º, fracción II, y 11 de la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como 24, párrafo segundo, del Acuerdo General 9/2005, al tratarse de un procedimiento de responsabilidad administrativa instruido contra un servidor público de este Alto Tribunal al que se atribuyen faltas consideradas como graves.

12. **SEGUNDO. Calidad de servidor público.** Ante todo debe tenerse la certeza de que la persona que se señala gozara de nombramiento como servidor público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de los hechos que supuestamente ocurrieron el treinta de junio de dos mil dieciséis. Ello pues se trata de un presupuesto básico para iniciar esta clase de procedimientos de responsabilidad, en términos de los artículos 109 constitucional y 20 del Acuerdo General 9/2005.
13. Al respecto, del material documental que consta en autos se advierte que ***** gozaba de nombramiento desde el dos mil cinco hasta el diez de abril de dos mil dieciocho (fecha en la que envió la constancia respectiva) como profesional operativo adscrito a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios.³
14. **TERCERO. Plazo de la investigación.** Se considera necesario tener la certeza de que la investigación se haya ajustado al plazo establecido el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis al veinte de marzo de dos mil diecisiete), y prorrogado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete –seis meses– previa solicitud de diecisiete de marzo anterior por la contraloría de este Alto Tribunal (hasta el veinte de septiembre de dos mil diecisiete descontándose los días declarados inhábiles por el *sismo ocurrido en México el diecinueve de septiembre*).⁴
15. Inclusive se advierte la aprobación de la prorroga se ajustó al hecho de que resultaba necesario recabar de manera esencial las pruebas consistentes en las declaraciones de los abogados ***** y ***** , así como el registro de entradas y salidas de vehículos de los edificios de las calles 16 de septiembre y Bolívar del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, entre otros.

³ Folio 996 a 997 de la investigación relativo al PRA-131/2016. Constancia de antigüedad enviada por la Directora General de Recurso Humanos e Innovación Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

⁴ <https://www.cjf.gob.mx/transparencia/paginas/diasInhabiles.htm#2017>

16. En ese sentido, de autos del cuaderno de investigación 131/2016 se advierte que el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Contralor de este Alto Tribunal cerró formalmente la investigación correspondiente, situación que se ajusta según el cómputo correspondiente.

17. **CUARTO. Material probatorio recabado.** Dentro del expediente los medios probatorios son:

- I. Copia certificada del escrito de queja de ***** de uno de agosto de dos mil dieciséis quien se ostentó como representante de *****, mediante el cual hizo del conocimiento los hechos narrados en relación con la supuesta responsabilidad administrativa del servidor público imputado.
- II. Copia certificada y simple del ticket de consumo del *Café Sanborns* de treinta de julio de dos mil dieciséis y dos copias simples de la factura correspondiente.
- III. Documentales relacionadas con las adjudicaciones a la empresa *****, así como contratos que el Alto Tribunal celebró con ésta.
- IV. Declaraciones de ***** (quien hizo valer originalmente la queja), ***** (secretaria del antes mencionado) y *****.
- V. Expediente personal del servidor público.
- VI. Videograbaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la Dirección General de Recursos Materiales; entradas y salidas de los edificios de Bolívar y Alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de treinta de junio de dos mil dieciséis.
- VII. Oficio de comunicación mediante el cual el apoderado de la empresa ***** manifestó que no cuenta con las grabaciones de las cámaras de seguridad del día treinta de junio de dos mil dieciséis dada la programación automática.

VIII. Controles de entradas y salidas de los edificios Alvaro y Bolívar.

IX. Oficio mediante el cual el Director General de Recursos Materiales de este Alto Tribunal remitió el acta de sesión relativa al treinta de junio de dos mil dieciséis en la que se llevó a cabo la discusión relacionada con la licitación pública nacional *****; se precisó la intervención de ***** y su actividad.

X. El control de llamadas del servidor público por el periodo del uno de junio al treinta y uno de julio de dos mil dieciséis.

XI. Escrito de ***** en el que manifestó el domicilio de los abogados ***** y ***** e informó que ya no trabajan en la empresa, y además comunicó acerca de la supuesta llamada realizada por ***** a las oficinas de la empresa *****.

XII. Oficio mediante el cual el Director General de Tecnologías de la Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del conocimiento que no se localizaron registros de llamadas al número de la empresa ***** , en los edificios Bolívar y 16 de septiembre el veintiuno de junio de dos mil dieciséis.

XIII. Razones actuariales mediante las cuales se hizo constar que no fue posible la localización de los abogados ***** y *****.

18. **QUINTO. Decisión.** El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación llega al convencimiento de que **los elementos probatorios valorados no arrojan certeza** para concluir que el servidor público cometió las conductas que se le imputaron.

19. Al respecto, el Tribunal Pleno es consciente de lo trascendental de su labor como órgano mayor jerárquico dentro del poder judicial⁵ que integra al Supremo Poder de la Federación junto con los poderes ejecutivo y legislativo, entre los que existe una independencia que constituye nada menos que la base de un auténtico estado democrático (artículo 49 constitucional), que conlleva a la división de poderes como elemento

⁵ Artículo 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

esencial para establecer un genuino estado de derecho⁶ y, por ende, representa una legítima esencia por preservar, y que para *Madison*⁷ tenía su clave, en caso de que los poderes se sobrepongan, en que cada uno de ellos retenga una motivación política distinta, de modo que cuando comparten la misma voluntad es que generan que la división de poderes pueda ser degradada, caso contrario, existiendo acumulación de éstos en las mismas manos se alcanzaría un avasallamiento del estado.

20. Y es ahí donde incluso el poder judicial adquiere una relevancia sinigual bajo la idea que llegó a entenderse por *Hamilton*⁸ en la necesidad de control de los actos de los poderes ejecutivo y legislativo desde la función judicial de control de los actos de poder, a cargo del poder judicial, que evolucionó en la medida de tratarse de un contrapeso dentro de un estado con una auténtica división de poderes.
21. De ahí tratándose de México, podemos decir de manera medular que el Poder Judicial de la Federación es el encargado de resolver conflictos entre las personas y entre los órganos del poder público, de proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, así como de mantener el equilibrio entre los restantes poderes. Lo que representa una tarea significativa que impacta de manera directa a la ciudadanía y, por ende, la legitimación de su actuación reside en una dicotomía que comprende la propia fortaleza de sus determinaciones y encontrar entre los ciudadanos una legitimación inclusive social –aun cuando sus pretensiones no siempre sean alcanzadas pero se logren bajo un parámetro exteriorizado de justicia–, así como de un actuar acorde a su función y responsabilidad.
22. Ahora, dicho poder se trata de una concepción que encuentra manifestación material en los servidores públicos que lo integran, por lo que la legitimación a la que se hizo referencia queda instada precisamente en el actuar de éstos, lo que releva un interés prioritario inclusive de la propia ciudadanía de que los servidores del poder judicial, se alejen de aquellas conductas que traigan consigo un deterioro no solo de la

⁶ Díaz Elías. Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Editorial Taurus.

⁷ El Federalista 47.

⁸ El Federalista 78.

percepción de sus instituciones, sino de sus funciones y de la injerencia positiva que debe evidenciar sus decisiones dentro de la sociedad.

23. En ese mismo sentido, el propio poder judicial está interesado en que sus servidores públicos desempeñen una labor –tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional– acorde a los principios de profesionalismo y excelencia que se requiere para su óptima funcionabilidad, de lo contrario ésta se verá obstaculizada y será redirigida a un escenario de esterilidad que pudiera agravarse si se llegara hasta el extremo de tomar decisiones que bajo un interés externo busquen favorecer a alguien.
24. Lo que significa que los hechos donde se pueda advertir aunque sea de manera mínima la insinuación de una responsabilidad por parte de algún servidor público, serán de atención inmediata y prioritaria para que a la brevedad y en un marco acorde de legalidad y respeto de derechos humanos, se logre la convicción mayor en cuanto a su existencia o no, para así preservar el honesto y profesional funcionamiento de la institución como aspectos de interés y demanda social.
25. Ello en el entendido de que los procedimientos que se desahoguen no tienen como fin principal la sanción, sino lograr la certeza de lo sucedido y poder esclarecer a partir de medios idóneos, si es que sucedieron actos anómalos que generen la responsabilidad administrativa y, entonces sí, establecer un castigo ajustado a los parámetros que correspondan y a la magnitud de ello.
26. Bajo ese escenario, desde hace varios años esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha seguido una línea irrestricta en investigar aquellas conductas –actos u omisiones– de responsabilidad de sus servidores públicos en el desempeño de sus funciones, para lo cual a través de su contraloría ha mantenido una actividad constante y ante cualquier sospecha, aun mínima, indagar a efecto de poder determinar de manera preliminar en un instante primario, si existen señales de alguna conducta que requiera de un mayor grado de averiguación para abrir formalmente una investigación.
27. Y de ser el caso una vez desahogado el procedimiento respectivo, -se reitera- bajo los estándares de un debido proceso con respeto a los derechos humanos, imponer una sanción severa que incluso puede llegar

hasta la destitución tratándose de responsabilidades graves, o bien, un castigo de menor dureza cuando se trate de actos que conlleven menor gravedad. Bajo el cuidado de no utilizarlos a partir de cualquier denuncia o queja como herramientas para amedrentar la función pública o servir un interés externo.

28. Ahora, en el caso el análisis de la conducta atribuida al servidor público deriva de que la empresa *****, por conducto de su representante legal, hizo del conocimiento de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, la existencia de hechos que pudieran constituir una infracción administrativa atribuida a ***** por la presunta obtención de un beneficio de \$***** (***** 00/100 M.N.), pretendiendo uno adicional que ascendía a la cantidad de \$***** (***** 00/100 M.N.), en relación con los posibles actos de corrupción cometidos en los procedimientos de adjudicación y contratación de servicios.
29. En la especie, la responsabilidad del servidor público se pretende demostrar además del escrito de denuncia, a partir de los elementos torales siguientes:
 1. El señalamiento por parte de ***** al tenor de la denuncia que presentó, relativa a la supuesta solicitud de dinero efectuada por ***** por los contratos que la empresa *****, había logrado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 2. Ticket de consumo de cuatro personas en el *Café Sanborns* ubicado en *****, colonia *****, en la entonces delegación de *****, por la cantidad de \$***** (***** 00/100 M.N.), al cual le fue adjuntada la factura.
 3. Videograbación del Director de Seguridad de este Alto Tribunal, en el que se advierte que el treinta de julio de dos mil dieciséis ***** sale de las oficinas de la Dirección General de Recursos Humanos ubicadas en el cuarto piso del edificio Alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que toma el elevador para salir del recinto ubicado en el Edificio de Bolívar junto con otra persona del sexo masculino, la cual se dirige al lado izquierdo de la calle de 16 de Septiembre, mientras que el servidor público en la misma calle vira al

lado derecho hacia la calle de Bolívar para posteriormente vérselo cruzar el paso vehicular de 16 de Septiembre hasta seguir avanzando y dejar de ver su imagen. Lo cual sucedió entre las 17:58:56 a las 18:00:14 horas.

4. La declaración de ***** de seis de octubre de dos mil dieciséis, en la que señaló que el veintiuno de julio de dos mil dieciséis ***** y ***** eran los abogados de la empresa ***** y que fueron a buscar a ***** en la oficina de calle Uruguay casi esquina con 20 de Noviembre, a los que les dijo que no estaba y si querían regresar más tarde o al día siguiente, a lo que contestaron que regresaban posteriormente sin decir el motivo por el que le buscaban, haciendo énfasis en que en ese momento no tenía datos para localizar a esas personas, pero de tenerlos en la oficina los proporcionaría. Pero que después de esa ocasión los abogados ya no se presentaron de nuevo ni llamaron más (lo cual hizo del conocimiento del capitán *****).

Asimismo, hizo referencia a que *como media hora después* que se retiraron llamó por teléfono ***** diciéndole que le pasaran al capitán sin decir un nombre, a lo que le comentó que no estaba pero él dijo que cómo era posible sino lo había visto salir. Entonces ella preguntó que dónde estaba ubicado para estar observado a qué hora salía o entraba el capitán, y acto seguido le repitió que no lo había visto salir para colgar y terminar la llamada (lo cual hizo del conocimiento del capitán *****). Manifestación en la que aclaró que ***** es la persona de recursos materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que solo lo conoce bajo ese nombre. Y agregó que en cuanto al número de teléfono de donde recibió la llamada no lo traía, pero en caso de encontrarse en el teléfono fijo de la oficina Joca, lo proporcionaría de inmediato a la contraloría.

Que con posterioridad el señor ***** se comunicó para tratar aspectos relacionados con el trabajo de los contratos de la corte para los inmuebles del ***** y ***** , para el servicio de guarda contra incendio, y que cuando iba a la Corte era atendida por él quien le recibía o entregaba contratos.

Añadió que por comentario del capitán ***** se enteró que fue citado por sus abogados ***** , ***** y ***** para decirle que

ya le habían dado a ganar mucho dinero de los contratos de la corte y necesitaban les diera dinero, pero sin conocer mayores detalles.

Finalmente, mencionó que llevaba trabajando cuatro meses en la empresa como secretaria o asistente de ***** y la última vez que habló con ***** fue para solicitar se trajera una factura a la ventanilla.

5. Los testimonios de *****y *****quienes fungieron como abogados de ***** . **Los cuales no se pudieron obtener ya que después de investigar su domicilio y tratar de encontrarlos para citarlo sin lograrlo, el Servicio de Administración Tributaria informó de sus domicilios fiscales cuando ya se había cerrado la investigación correspondiente.**

Inclusive una vez que el servidor público ofreció –al hacer valer sus defensas– como pruebas de su parte las testimoniales de dichas personas sin señalar el domicilio donde pudiera localizárseles cuando la carga era para él, entonces se desecharon esas probanzas (acuerdos de nueve y veintisiete de febrero de dos mil dieciocho).

30. Del listado de los medios de convicción base de la imputación es de concluirse lo siguiente:
31. En relación con la presentación de un *ticket de consumo* de *Sanborns* **no resulta suficiente para tener por cierto que el servidor público se reunió con el denunciante y sus abogados**, pues resulta una probanza que denota subjetividad y de ninguna manera arroja por sí misma una certeza o seguridad para afirmar la existencia de un hecho que denotara una responsabilidad administrativa.
32. Máxime que **el servidor público de manera expresa negó haberse reunido con aquellas personas y dijo que *solo los alcanzó a ver*, esto es, que si bien se encontraban en el mismo lugar donde él asistía comúnmente –según su dicho– a cenar, lo cierto es que no se comprobó en verdad que se reunió en ningún momento con ellos, incluso agregó que no sabía si éstos habían notado su presencia.**
33. Por otro lado, el video en el que se advierte que el servidor público sale de las instalaciones ubicadas en Bolívar, tampoco genera la certeza de que por salir en un horario (al que incluso se refiere como hora de salida

habitual), signifique que se trasladó forzosamente a reunirse con el denunciante y su abogados, ya que al así entenderlo, se trata de una mera afirmación subjetiva que no encuentra una verdadera convicción.

34. En ese escenario, debe entenderse que esos elementos se presentan con la intención de dotarles del carácter de *pruebas indiciarias o circunstanciales*, en tanto que su finalidad es la de acreditar un par de hechos a efecto de presumir la existencia de otro hecho sobre el que no se presentan probanzas directas que demuestren su existencia material, como lo es una supuesta reunión y la entrega de una cantidad de dinero en efectivo que se solicitó.
35. En relación con éstas, en las tesis aisladas 1a. CCLXXXIV/2013 (10a.) y 1a. CCLXXXV/2013 (10a.) de rubros: *PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICIOS PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR*⁹ y *PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA LÓGICA PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR*¹⁰ –las cuales se consideran aplicables– se dijo que si bien es posible sostener la responsabilidad de una persona a través de la prueba indiciaria o circunstancial,¹¹ lo cierto es que deben concurrir los requisitos que se refieren a dos elementos fundamentales para que se considere actualizada: **i)** los indicios y **ii)** la inferencia lógica, ya que de lo contrario se vulneraría el principio de presunción de inocencia.¹²

⁹ Época Décima. Registro: 2004756. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, octubre de 2013, tomo 2. Materia(s): Penal. Página: 1057.

¹⁰ Época Décima. Registro: 2004755. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, octubre de 2013, tomo 2. Materia(s): Penal. Página: 1056.

¹¹ Entendida como aquélla que se encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, mismos que no son constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la lógica y las reglas de la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acusado. Esta prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a partir de hechos probados, mismos que se pueden encontrar corroborados por cualquier medio probatorio, también resulta probado el hecho presunto. Tesis aislada 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.) de rubro: *PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES* (Registro 2004757).

¹² Los cuales aun tratándose de materia penal resultan aplicables al tratarse a un procedimiento administrativo sancionador. Época Décima. Registro: 2018501. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, noviembre de 2018, tomo II. Materia(s): Administrativa. Jurisprudencia 2a./J. 124/2018 (10a.). Página: 897.

NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. En la jurisprudencia P./J. 99/2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue contundente en precisar que tratándose de las normas relativas al procedimiento administrativo sancionador, es válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, en el entendido de que la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible cuando resulten compatibles con su naturaleza. En ese sentido, para que resulten aplicables las técnicas garantistas mencionadas, es requisito indispensable que la norma de que se trate esté inmersa en un procedimiento del derecho administrativo sancionador, el cual se califica a partir de la existencia de dos condiciones: a) que se trate de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento formal); y, b) que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento material), de manera que se advierta que su sustanciación sea con la intención manifiesta de determinar si es procedente condenar o sancionar una conducta que se estima reprochable para el Estado por la comisión de un ilícito, en aras de salvaguardar el orden público y el interés general; es decir, ese procedimiento debe tener un fin represivo o retributivo derivado de una conducta que se considere administrativamente ilícita. Sobre esas bases, no basta la posibilidad de que el ejercicio de una facultad administrativa pueda concluir con el establecimiento de una sanción o infracción, sino que se requiere de manera concurrente que su despliegue entrañe una manifestación de la

36. En cuanto a los indicios, deben cumplir con cuatro requisitos:

- a)** Deben estar acreditados mediante pruebas directas, esto es, los indicios deben encontrarse corroborados por algún medio de convicción pues, de lo contrario, las inferencias lógicas carecerían de cualquier razonabilidad al sustentarse en hechos falsos. En definitiva, no se pueden construir certezas a partir de simples probabilidades;
- b)** Ser plurales, es decir, la responsabilidad penal no se puede sustentar en indicios aislados;
- c)** Deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar, es decir, con alguna relación material y directa con el hecho criminal y con el victimario; y,
- d)** Estar interrelacionados entre sí, esto es, los indicios forman un sistema argumentativo, de tal manera que deben converger en una solución, pues la divergencia de alguno restaría eficacia a la prueba circunstancial en conjunto.

37. Y que la inferencia lógica debe cumplir con dos requisitos:

- a)** Que sea razonable, es decir, que además de no ser arbitraria, absurda e infundada, responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia.

En algunos casos, la hipótesis generada por la prueba circunstancial se basa en afirmaciones absolutamente imposibles física o materialmente, así como inverosímiles, al contener una probabilidad mínima de que se hubiese actualizado, en contraste con otras hipótesis más racionales y de mayor conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia.

Así, cuando los mismos hechos probados permitan arribar a diversas conclusiones, el juzgador deberá tener en cuenta todas ellas y razonar por qué elige la que estima como conveniente; y,

facultad punitiva del Estado, esto es, que el procedimiento tenga un marcado carácter sancionador como sí ocurre, por ejemplo, con los procedimientos sancionadores por responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

b) Que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato que se intenta demostrar, existiendo un enlace directo entre los mismos.

38. Lo anterior sobre la base de que los indicios plenamente acreditados pueden no conducir de forma natural a determinada conclusión, ya sea por el carácter no concluyente, o excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia.
39. A la luz de lo anterior, es posible afirmar que no pueden tenerse como indicios aquellos elementos –*ticket de consumo* de *Sanborns* y video donde sale de las instalaciones de Bolívar–, en la medida que por sí mismos o incluso tratando de vincularlos, carecen de fuerza demostrativa para poder afirmar que por el mero hecho de que el servidor público salió de su trabajo a la hora acostumbrada y fue a cenar a un restaurante pueda llegar al punto de entender que conllevó a que su salida fue con la intención de dirigirse en realidad a reunirse en un restaurante con un grupo de personas para solicitarles dinero, pues solo conllevan a la certeza de la hora que salió de su centro de labores; del lugar donde cenó y de que vio a una persona.
40. Incluso debe decirse que las testimoniales en relación con los abogados del denunciante, eran significativas en la medida que los dichos de aquellas personas pudieran generar alguna convicción de lo sucedido en aquel momento al señalarse que había estado ahí presentes y, más aún, habían sido partícipes de los hechos objeto de investigación en el procedimiento.
41. En efecto, dichas probanzas resultaban con carácter de trascendentes pues a partir de esos testimonios podía dilucidarse si en efecto existió una reunión entre el denunciante y denunciado, **y más aún, debe tenerse en cuenta que inclusive, dichas personas pueden tener una calidad más allá de testigos, pues aun cuando no pudieran ser sancionados en la vía administrativa, a partir del dicho del denunciante éstos pudieran entenderse como partícipes de la obtención ilegal de dinero y resultar con alguna responsabilidad por la vía penal.**
42. En ese sentido, **después de cerrada la investigación se obtuvieron datos de los domicilios de esas personas, pero ya no se requirió su**

presencia al haberse agotado aquélla después de haberse ampliado previamente, lo cual obedeció a actuar acorde al marco legal y procedimental relativo, por tanto, fue imposible ya contra con esas probanzas.

43. Así, debe considerarse que para lograr entender que el servidor público obtuvo un beneficio económico en este caso, era necesario tener por acreditado que se realizó la reunión entre el denunciante y sus dos abogados con el denunciado, pues se ha afirmado que la entrega de dinero y la solicitud de una suma distinta se efectuó precisamente en aquel momento dentro del *Sanborns*, por lo que se insiste, las declaraciones de aquellos abogados eran un medio que podía lograr una convicción ya sea en sentido positivo o negativo de su celebración, pero ante su ausencia e imposibilidad de considerarlas, los medios existentes resultan insuficientes.
44. Destaca que ni siquiera a través de esta determinación pudiera retrotraerse el asunto hasta el punto previo a aquel cierre y ordenar la obtención de las testimoniales de referencia, pues una vez que la investigación agotó las posibilidades de prorroga legalmente establecidas, sería desvirtuar el procedimiento establecido en perjuicio del servidor público dándole una naturaleza inquisitiva, es decir, como si el fin fuera llegar a la sanción forzosamente incluso pasando por alto las formalidades establecidas en ley. Pues en todo caso, si dichas testimoniales no fueron obtenidas al haberse iniciado la investigación oficiosamente al desechar la queja de origen, entonces era una carga que la autoridad investigadora debió agotar, por lo que al no hacerlo así sería inviable pretender darle otra oportunidad sin que se violara la legalidad del procedimiento que se desahogó y de cualquier sanción que hipotéticamente pudiera imponerse al servidor público.
45. Por otra parte, es de suma relevancia el hecho de que no fue desahogada la prueba consistente en los videos solicitados por el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de las cámaras de vigilancia circundantes al restaurante *Sanborns*, de la colonia *****. Medio probatorio con el que se podría comprobar si el servidor público imputado salió del citado establecimiento junto a los abogados de la empresa

denunciante. Lo cual pudiera arrojar algún grado de certeza para demostrar que existió efectivamente una reunión entre el denunciado y denunciante.

46. Lo anterior es de importancia en el entendido de que si lo que se pretende comprobar es la obtención de beneficios adicionales a los que se reciben en contra prestación al empleo, cargo o comisión que desempeñaba hasta ese momento el servidor público *****; el juzgador debe de tomar en cuenta que el asignar valor a las pruebas debe sujetarse a ciertos parámetros para justificar el resultado de la ponderación alcanzada.
47. Esto pues **los indicios deben estar sometidos a una constante verificación en torno a su acreditación y a su capacidad para generar conclusiones, es decir, no se pueden construir certezas a partir de simples probabilidades.** Sirve de sustento a lo anterior, las tesis aisladas 1a. CCLXXXIV/2013 (10a.) y 1a. CCLXXXVI/2013 (10a.) emitidas por esta SCJN, de rubros: *PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICIOS PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR*; y, *PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. EL JUZGADOR DEBE EXPLICAR, EN LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, EL PROCESO RACIONAL A TRAVÉS DEL CUAL LA ESTIMÓ ACTUALIZADA.*
48. Respecto a la declaración rendida por ***** es importante precisar que en esta se manifestó que la supuesta llamada realizada el veintiuno de julio de dos mil dieciséis por ***** **fue a las oficinas de la empresa** *****.
49. Ahora, el propio denunciante en su declaración comunicó que el número de la empresa en comento es el ***** (*****) -foja 53 vuelta P.R.A. 131/2016-. No obstante el Director General de Tecnologías de la Información de este Alto Tribunal a través del oficio ***** informó que **no se localizaron registros de llamadas al número telefónico** ***** , **el día y la hora señalada** (en los edificios ubicados en la calle de 16 de Septiembre 38 y Bolívar 30, el veintiuno de julio de dos mil dieciséis entre las 12:30 y 14:00 horas) y al efecto remitió las constancias que acreditaron su dicho ya que a foja 804 del P.R.A. 131/2016 se advierte el detalle de llamadas realizadas al número telefónico en cita del periodo comprendido

del uno al treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, **sin que se desprenda que se haya realizado la supuesta llamada en la fecha informada.**

50. **Situación que pone de manifiesto que la declaración contiene inconsistencias**, pues además de que al sostener tal aseveración la sustentante no adjuntó las constancias pertinentes para acreditar su dicho (registro de llamadas entrantes), se debe hacer hincapié que el *detalle de llamadas* de mérito está validado y revisado por funcionarios de la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que **tiene valor probatorio pleno**, en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de responsabilidades administrativas, conforme a los diversos 4° del Acuerdo General Plenario 9/2005 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.¹³
51. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que del registro de llamadas se advierta que ***** marcó el número de la oficina de ***** en diversos días del mes de julio (uno, cuatro, cinco, ocho y trece), pues en su declaración al responder la pregunta 11 manifestó que sí era necesaria la comunicación vía telefónica o electrónica con los proveedores, prestadores de servicios, con sus representantes o con personal de las empresas. Sin embargo, tal como quedó anunciado, en la fecha en que ***** indicó que el servidor público había llamado para preguntar por *el capitán* no existe registro saliente de comunicación.
52. En tal sentido si las pruebas que fungieron como base para llegar a la conclusión de que el servidor público posiblemente incumplió la obligación contenida en el artículo 8, fracción XIII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y por ende podría ubicarse en la causa de responsabilidad prevista en la fracción XI, del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, **no resultan suficientes para llegar a la certeza jurídica** de que en efecto el trabajador de este Alto Tribunal recibió del denunciante ***** (***** 00/100 M.N.), pretendiendo una cantidad adicional que ascendía a la

¹³ Sin que pase desapercibido que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos quedó abrogada con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con el párrafo último, del artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis. No obstante, tal normativa prevé que los asuntos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas deben concluirse conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Por tanto si al ordenarse el inicio de la investigación (diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis) aún no entraba en vigor la normativa en comento, es de concluirse que en el caso las reglas han de sujetarse a lo dispuesto por la ley primigeniamente citada.

cantidad de \$***** (***** 00/100 M.N.), no es posible imponer sanción alguna, pues de llegar a realizarlo se estaría pasando por alto el principio de presunción de inocencia, el cual es aplicable a los procedimientos administrativos sancionatorios –como es el caso- con matices o modulaciones.¹⁴

53. En relación con la presunción de inocencia es posible que ese derecho se manifieste como estándar de prueba, de tal modo que dicha prerrogativa establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas suficientes para acreditar la existencia de la responsabilidad imputada, mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. En tanto que para considerar que existe suficiente material probatorio para debilitar la presunción de inocencia, es obligación para el órgano jurisdiccional asegurarse que las probanzas desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada en el juicio.
54. Al respecto son aplicables las tesis del Tribunal Pleno P. VII/2018 (10a.) de rubro: *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONTENIDO DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL.* (Registro: 2018965). Y la diversa P. VI/2018 (10a.) de rubro: *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA.* (Registro: 2018964).
55. Por tanto, si en el caso el acervo probatorio no confirma de manera tácita y contundente la hipótesis de la acusación relacionada a que ***** incumplió con la obligación de desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sino que por el contrario existe la incertidumbre racional de que al menos se haya reunido con los abogados *****y ***** el día treinta de junio de dos mil dieciséis en el restaurante Sanborns, no es factible llegar a realizar el análisis de la sanción a imponer.

¹⁴ P./J. 43/2014 (10a.) de rubro: *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.* (Registro: 2006590).

56. En apoyo a lo anterior, debe decirse que el Tribunal Pleno¹⁵ ha definido que la presunción de inocencia es un derecho humano de observancia obligatoria para todas las autoridades del país y que el principio *in dubio pro reo* forma parte de aquel derecho en su vertiente de estándar de prueba.
57. Así que si se asume que la *duda* relativo a ese principio hace referencia a la incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, es posible que para determinar si en una instancia se vulneró la presunción de inocencia, debe verificarse si en un caso concreto existían elementos de prueba para considerar que se había actualizado una duda razonable.
58. De modo que la presunción de inocencia impone el deber de analizar el material probatorio valorado para cerciorarse que de éste no se desprende una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. Y si esto sucede, lo relevante no es que se suscite la duda, **sino la existencia en las pruebas de condiciones que justifican una duda**. Es decir, lo trascendente no es que la duda se presente de hecho **sino que la duda haya debido suscitarse a la luz de la evidencia disponible**.
59. A partir de ello se corrobora que en la especie no es posible alcanzar ni una incertidumbre en contrario sentido a la presunción de inocencia del servidor público ante la carencia de mayores elementos probatorios que la justificaran. De modo que aceptar lo contrario solo nos llevaría a un escenario donde sin duda alguna se violaría aquella presunción que opera en su favor y, por ende, también se transgrediría el texto de la Constitución Federal.
60. Ilustra lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno P. VIII/2018 (10a.) que lleva por título: *IN DUBIO PRO REO. ESTE PRINCIPIO GOZA DE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL AL CONSTITUIR UNA REGLA IMPLÍCITA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA*. (Registro: 2018951).
61. Sobre el particular, es importante hacer la precisión de que si bien el derecho de presunción de inocencia es mayormente relacionado con el ámbito penal, al pertenecer el asunto al derecho administrativo

¹⁵ Tesis Aislada P. V/2018 (10a.) de rubro: *IN DUBIO PRO REO. INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE "DUDA" ASOCIADO A DICHO PRINCIPIO*. (Registro 2018952).

Tesis Aislada P. IV/2018 (10a.). *IN DUBIO PRO REO. OBLIGACIONES QUE IMPONE ESTE PRINCIPIO A LOS TRIBUNALES DE AMPARO*. (Registro: 2018950).

sancionador resultan plenamente aplicables los principios que rigen la rama en comento de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 99/2006 de rubro: *DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.* (Registro: 174488), así como la diversa de la Segunda Sala 2a./J. 124/2018 (10a.) de rubro: *NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.* (Registro: 2018501).

62. En tales consideraciones, el Tribunal Pleno determina que debe prevalecer un marco legal y acorde de respeto a los derechos humanos, donde **se tengan elementos de prueba efectivos y suficientes así como una valoración que genere aun de manera mínima, la convicción de que la conducta negativa se llevó a cabo**, pues de lo contrario, podría entonces imponerse una sanción bajo meras apreciaciones subjetivas que carecen de un respaldo probatorio eficaz.

ÚNICO. No se acredita la causa de responsabilidad materia del procedimiento de responsabilidad administrativa 131/2016 atribuida a
*****.

Notifíquese; y devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal para que, en su oportunidad, lo archive como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Piña Hernández, en contra de algunas consideraciones, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea. Votó en contra el señor Ministro Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea hizo la declaratoria correspondiente.

Durante la discusión y votación de este asunto no estuvo presente el señor Ministro Pardo Rebolledo.

Firman los señores Ministros Presidente y al Ponente con el Secretario General de Acuerdos que da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

PONENTE:

MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI, 8º, 23, 24, fracción VI, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, vigente a partir del día siguiente, se publica esta versión pública en la cual se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

